



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS I

RAJ.4307/2024

TJ/I-45616/2023

ACTOR: DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

OFICIO No:TJA/SGA/I/(7)4058/2024

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2024

ASUNTO: CERTIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN

MAESTRO ERWIN FLORES WILSON
MAGISTRADO TITULAR DE LA PONENCIA DIECISÉIS DE LA
PRIMERA SALA ORDINARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DERECHO A LA
BUENA ADMINISTRACIÓN DE ESTE H. TRIBUNAL
P R E S E N T E.

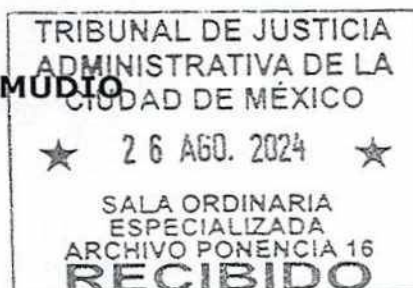
Devuelvo a Usted, el expediente del juicio de nulidad número **TJ/I-45616/2023**, en **61** fojas útiles, mismo que fue remitido para sustanciar el recurso de apelación señalado al rubro, y en razón de que con fecha **VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, el pleno de la Sala Superior de este Tribunal emitió resolución en el mismo, la cual fue notificada a **las autoridades demandadas el TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO** y a la parte actora el **VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, y toda vez que ha transcurrido en exceso el término para que las partes interpusieran medio de defensa alguno (Amparo o Recurso de Revisión), con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, vigente al día siguiente de su publicación, el primero de septiembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y el artículo 15 fracción XIV del Reglamento Interior vigente a partir del once de junio de dos mil diecinueve, **se certifica** que en contra de la resolución del **VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, dictada en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, no se observa a la fecha en los registros de la Secretaría General de Acuerdos I que se haya interpuesto algún medio de defensa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS I DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAESTRO JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO

JBZ/ECG





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO:
RAJ.4307/2024

JUICIO NÚMERO: TJ/I-45616/2023

PARTE ACTORA: DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

AUTORIDAD DEMANDADA:
GERENTE DE PRESTACIONES Y BIENESTAR SOCIAL
DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA
PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

APELANTE:
GERENTE DE PRESTACIONES Y BIENESTAR SOCIAL
DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA
PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

MAGISTRADA PONENTE:
DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
LICENCIADA ADRIANA GONZÁLEZ CARBAJAL

Acuerdo del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, correspondiente a la sesión plenaria
del día veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN NÚMERO RAJ.4307/2024,
interpuesto el diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, por la autorizada
de la autoridad demandada en el presente asunto, en contra de la sentencia
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por la
Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades
Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, en el
juicio de nulidad número TJ/I-45616/2023.

RESULTANDO

1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en la Oficialía
de Partes de este Tribunal en fecha tres de agosto de dos mil veintitrés,
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX por su propio derecho, demandó la nulidad de:

TJ/I-45616/2023
RAJ.4307/2024



PA-004614-2024

"La resolución contenida en **PAGO DE PENSIÓN**, bajo el número de folio DATO PERSONAL ART.186 LTAIP le fecha **catorce de marzo de dos mil veintitrés**, emitido por el C. **Rodrigo Pérez Zepeda, Gerente de Prestaciones y Bienestar Social** de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, mismo que me fue notificado el día **veintitrés de junio de dos mil veintitrés**, de manera personal. Lo anterior, dado que se está realizando en mi contra un detrimento en el fruto de mi trabajo, esto al realizarse un descuento indebido sobre el monto retroactivo de la Pensión que por derecho me corresponde, sin fundamentar o motivar su actuar, pasando por alto de lo señalado en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en ningún momento se hizo de conocimiento la razón del porque dichas cantidades eran descontadas del cobro a mi favor, y suponiendo sin conceder que la Caja hubiese señalado la razón por la cual me estaba privando de la pensión que por derecho me corresponde, el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, es claro en señalar que los créditos donde la caja tenga el carácter de acreedor prescribirán a los **DIEZ AÑOS**, motivo por el cual no existe motivo y fundamento alguno que justifique el actuar de la autoridad demandada."

(El accionante impugnó el pago de pensión de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Gerente de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, mediante el cual realizó un descuento por DATO PERSONAL ART.186 LTAIP

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIP sobre el monto retroactivo de su pensión, por un adeudo derivado del pagaré número DATO PERSONAL ART.18 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el cual sería liquidado en un plazo de treinta y seis pagos.)

2. ADMISIÓN DE DEMANDA. Mediante proveído de fecha siete de agosto de dos mil veintitrés, el Magistrado Titular de la Ponencia Dieciséis de la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, admitió a trámite la demanda de nulidad, así como las pruebas ofrecidas en el capítulo respectivo del escrito de demanda, asimismo ordenó emplazar a la autoridad señalada como demandada.

3. CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y VISTA PARA ALEGATOS. A través del proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por formulada la contestación de demanda por la autoridad demandada en el presente juicio, en la que se pronunció respecto del acto controvertido, ofreciendo pruebas, planteando causales de improcedencia y defendiendo la legalidad del acto impugnado. Asimismo, mediante el mismo acuerdo se otorgó un plazo de cinco días hábiles a las partes para que formularan



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-3-

alegatos por escrito, precisando que transcurrido dicho término con o sin alegatos quedaría cerrada la instrucción, siendo así, que las partes contendientes no presentaron alguna promoción mediante la cual ejercieran ese derecho.

4. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, el Magistrado Instructor en el presente juicio tuvo por cerrada la instrucción del presente juicio, de conformidad con los artículos 94 y 153 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que se ordenó dictarse la resolución que en derecho correspondiera.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, la Sala de Primera Instancia dictó sentencia en la que **declaró la nulidad** del acto impugnado. Dicha sentencia fue notificada a todas las partes el trece de diciembre de dos mil veintitrés, tal como consta en los autos del juicio de nulidad en que se actúa. Del fallo en comento, se desprenden los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. - Esta Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal es COMPETENTE para conocer del presente asunto, en términos de lo expuesto en el Considerando Primero de este fallo.

SEGUNDO. - **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO**, atento a las consideraciones expuestas a lo largo del Segundo Considerando de la presente sentencia.

TERCERO. - **SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO**, en términos del Considerando Sexto de esta resolución y para los efectos indicados en la parte final del mismo Considerando.

CUARTO. - Se hace saber a las partes que en contra de la presente sentencia pueden interponer el recurso de apelación dentro de los diez días siguientes al que surta sus efectos la notificación.

QUINTO. - A efecto de garantizar debidamente el Derecho Humano de acceso a la justicia, en caso de duda, las partes pueden acudir ante el Magistrado Ponente, para que les explique el contenido u alcances de la presente sentencia.

SEXTO. - **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.**

TJ/I-45616/2023
AUTOS



PA-03614-2024

(La Sala Ordinaria declaró la nulidad de la resolución controvertida, toda vez que la autoridad demandada, al momento de emitir el acto, hoy debatido, fue omisa en precisar cuáles fueron las razones por las que se aplicaría un descuento respecto del pago retroactivo de pensión de la accionante, trasgrediendo en perjuicio del demandante la garantía constitucional de fundamentación y motivación; asimismo, respecto a la procedencia de la pretensión de la actora en el sentido de que ha operado la prescripción para hacer efectivo el cobro del préstamo que la demandante adeudaba, se determinó que dicha figura si operaba en el presente caso, pues el otorgamiento del préstamo fue el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, por lo que el plazo de las 36 quincenas para su liquidación concluyó hasta el quince de mayo de dos mil once, de ahí que, el término de diez años señalado en el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal para que operara la prescripción, feneció en la primera quincena de mayo de dos mil veintiuno, siendo que el descuento a la actora se realizó hasta el catorce de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que ya se había actualizado la prescripción para requerir los créditos que tuviera derecho la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México en la que tenga carácter de acreedor.

Derivado de lo anterior, y dado que el acto impugnado fue declarado nulo, la autoridad demandada quedó obligada a emitir un nuevo acto, debidamente fundado y motivado en el que se abstuviera de hacer efectivo el cobro de cualquier cantidad derivada del préstamo concedido a la actora cuando era trabajadora en activo y realizar el pago de los montos que ya le fueron descontados al actor.)

6. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. En desacuerdo con el fallo de primera instancia, con fecha diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, la autoridad demandada a través de su autorizada, interpuso recurso de apelación, de conformidad y en los términos de lo previsto en el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

7. ADMISIÓN Y RADICACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Por auto de fecha once de abril de dos mil veinticuatro, se admitió y radicó el recurso de apelación por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de su Sala Superior, se designó como Magistrada Ponente a la Doctora Mariana Moranchel Pocaterra, y se ordenó correr traslado a la parte actora con copia simple del mismo, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-5-

8. RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR LA MAGISTRADA PONENTE. Con fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, la Magistrada Ponente recibió los autos del juicio de nulidad y del recurso de apelación que se trata.

CONSIDERANDO

I. **COMPETENCIA.** Este Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el recurso de apelación promovido, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 9, 15 fracción VII y 16 de la Ley Orgánica de este Tribunal, y los diversos 1, 116, 117 y 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, vigentes a partir del dos de septiembre de dos mil diecisiete, de acuerdo a lo previsto en el artículo Primero Transitorio de las referidas Leyes.

II. **EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** La sentencia recurrida a través del recurso de apelación materia de análisis es existente, según puede constatarse de las actuaciones del juicio contencioso administrativo TJ/I-45616/2023.

III. **OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO.** El recurso de apelación RAJ.4307/2024 fue interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en el presente asunto, el **diecinueve de enero de dos mil veinticuatro**, esto es dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; lo anterior en razón que, si la sentencia recurrida se le notificó el **trece de diciembre de dos mil veintitrés**, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el catorce de diciembre de dos mil veintitrés, dicho término corrió del **quince de diciembre de dos mil veintitrés al dieciocho de enero de dos mil veinticuatro**, sin computar los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, y treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete de



enero de dos mil veinticuatro, por corresponder al segundo periodo vacacional de este Tribunal en el año dos mil veintitrés, asimismo, no se computan los días trece y catorce de enero de dos mil veinticuatro, por haber sido días inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la precitada Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Ahora, si bien es cierto que las demandadas, a través de su autorizada, presentaron su oficio de apelación el diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, es decir, al día hábil siguiente del vencimiento del plazo de diez días que prevé el artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa, lo cierto es que lo presentó en la primera hora hábil del día siguiente, veamos:



Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México
Oficialía de Partes

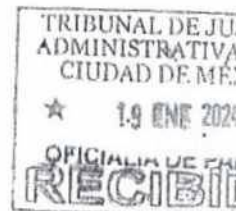
T J / I - 4 5 6 1 6 / 2 0 2 3

RA

Acto: DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX
Autoridad demandada: GERENTE GENERAL DE PRESTACIONES Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentó: AUTORIDAD-GERENTE GENERAL DE PRESTACIONES Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 2024-01-19 09:41:48
No. juicio: TJ/I-45616/2023
No. folio: DATO PERSONAL ART.186

Recurso de apelación: RAJ.4307/2024
Referencia: (RAJ.4307/2024) (1)
Relacionados: RAJ.4307/2024(1)
Dirigido: SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS I
Sala: PRIMERA SALA ESPECIALIZADA
Ponencia: PONENCIA DIECISEIS
Magistrado(a): MTRO. ERWIN FLORES WILSON
Acto impugnado: RESOLUCIONES DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA
Concepto: RECURSO DE APELACIÓN
Procedencia: PARTICULAR
Materia: ADMINISTRATIVA
Observaciones: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA
Copias original: 0



De la digitalización anterior se advierte que la autorizada de la autoridad demandada presentó el oficio de apelación a las nueve horas con cuarenta y un minutos y cuarenta y ocho segundos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, por lo que se acredita que presentó la apelación dentro del plazo señalado en el mencionado artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-7-

Así las cosas, resulta oportuno el recurso de apelación en mérito, ya que a su vez es oportuna la presentación de documentos dentro de la primera hora hábil del día siguiente al del vencimiento del plazo, cuando con motivo de un horario de labores fijado en acuerdos administrativos o leyes secundarias se restringieron las veinticuatro horas; dado que así se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 108/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual apareció publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de dos mil nueve, veamos:

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES OPORTUNA SU PRESENTACIÓN EN LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, CUANDO CON MOTIVO DE UN HORARIO DE LABORES FIJADO EN ACUERDOS ADMINISTRATIVOS O LEYES SECUNDARIAS SE RESTRINGIERON LAS VEINTICUATRO HORAS. El plazo para la presentación de una demanda de amparo directo debe observarse estrictamente, ya que constituye un supuesto que delimita el tiempo en que la parte inconforme con la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio puede válidamente ejercitar esa acción, sin embargo, ello también implica la obligación de la autoridad responsable de respetarlo y, no limitarlo o restringirlo, pues cualquier acción tendiente a hacerlo entraña una restricción ilegal al derecho fundamental de pedir justicia. En otras palabras, el ejercicio de la acción de amparo a través de la presentación del escrito respectivo no puede limitarse mediante la reducción del término, aunque sea de unas horas, agravando a la parte quejosa que sabe que dispone de un lapso determinado y que el último día de éste se cuenta como de veinticuatro horas. En esas condiciones, cuando con motivo de un horario de labores fijado en acuerdos administrativos o leyes secundarias, se restrinja la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo directo, generándose la imposibilidad de hacerlo hasta las veinticuatro horas del día de vencimiento, lleva a concluir que es oportuna su presentación en la primera hora hábil del día siguiente, ya que por causas ajenas al quejoso se vio imposibilitado para hacerlo el último día del plazo

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación RAJ.4307/2024 es **PROCEDENTE**, toda vez que fue interpuesto por parte legítima, esto es, por la autorizada de la autoridad demandada en el presente asunto, en contra de la sentencia de primera instancia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, en el juicio de nulidad número TJ/I-45616/2023.

V. AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. En el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, la autoridad apelante señaló que la sentencia apelada de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio contencioso administrativo número **TJ/I-45616/2023**, le causa agravio, tal y como se desprende de los argumentos planteados en el oficio que corre agregado en el expediente del citado recurso, los cuales serán analizados posteriormente sin que sea necesario transcribirlos, en razón de que no es esencial para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número S.S.17, perteneciente a la Cuarta Época, emitida por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en sesión extraordinaria de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de marzo de dos mil quince, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES A LOS RECURSOS DE APELACIÓN ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los artículos que integran el Capítulo XI del Título Segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, denominado 'De las Sentencias', y en particular el diverso 126 se advierte que las sentencias que emitan las Salas no necesitan formulismo alguno, razón por la cual se hace innecesaria la transcripción de los agravios hechos valer por el apelante, sin embargo, tal situación no exime de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad debiendo para ello hacer una fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, señalando los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitar a los puntos cuestionados y a la solución de la Litis planteada en acato al dispositivo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

VI. RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Este Pleno Jurisdiccional considera importante precisar que, en primer lugar, la Sala de Origen declaró la nulidad de la resolución controvertida, toda vez que la autoridad demandada, al momento de emitir el acto hoy debatido, fue omisa en precisar cuáles fueron las razones por las que se aplicaría un



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-9-

descuento respecto del pago retroactivo de pensión de la accionante, trasgrediendo en perjuicio del demandante la garantía constitucional de fundamentación y motivación; asimismo, respecto a la procedencia de la pretensión de la actora en el sentido de que ha operado la prescripción para hacer efectivo el cobro del préstamo que la demandante adeudaba, se determinó que dicha figura si operaba en el presente caso, pues el otorgamiento del préstamo fue el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, por lo que el plazo de las DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCI para su liquidación concluyó hasta el quince de mayo de dos mil once, de ahí que, el término de diez años señalado en el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal para que operara la prescripción, feneció en la primera quincena de mayo de dos mil veintiuno, siendo que el descuento a la actora se realizó hasta el catorce de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que ya se había actualizado la prescripción para requerir los créditos que tuviera derecho la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México en la que tenga carácter de acreedor.

Derivado de lo anterior, y dado que el acto impugnado fue declarado nulo, la autoridad demandada quedó obligada a emitir un nuevo acto, debidamente fundado y motivado en el que se abstuviera de hacer efectivo el cobro de cualquier cantidad derivada del préstamo concedido a la actora cuando era trabajadora en activo y realizar el pago de los montos que ya le fueron descontados al actor.

Lo anterior, se advierte de la lectura del Considerando VI de la sentencia sujeta a revisión, mismo que se transcribe a continuación:

"VI.- Estudio de la legalidad del acto impugnado. Esta Sala, después de analizar los argumentos expuestos por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación y, hecha la valoración de las pruebas admitidas, desahogadas, otorgando pleno valor probatorio a las documentales que obran en autos en original o en copia certificada, de conformidad con la fracción I del artículo 98 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; procede a estudiar los argumentos expuestos por la parte actora en su escrito inicial de demanda.

Como premisa, debe decirse que las Salas de este Tribunal deben resolver la pretensión efectivamente planteada en la demanda de nulidad, previa

TJI-45616/2023
Sala I
Excmo. Jefe



PA-004614-2024

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos y suplir la deficiencia de la queja en los casos previstos por dicha norma; de ahí que el escrito inicial constituye un todo y su análisis no debe circunscribirse al apartado de los conceptos de impugnación, sino a cualquier parte de éste donde se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, como lo ordena el propio precepto 97 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en su fracción IV, al disponer que las sentencias del órgano jurisdiccional referido contendrán el análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, lo cual implica que el estudio de la demanda en el juicio contencioso administrativo debe ser integral y no en razón de uno de sus componentes.

La parte actora señala en su escrito inicial, medularmente lo siguiente:

- Que el oficio impugnado está indebidamente fundado y motivado.
- Que la demandada realiza un descuento indebido sobre el monto retroactivo de la pensión que le corresponde.

Al contestar la demanda, la responsable señaló que el oficio se encuentra debidamente fundado y motivado, además señala, que no existe transgresión por parte de la demandada.

Una vez precisado lo anterior, a juicio de esta Juzgadora, las manifestaciones de la parte actora son FUNDADAS, en relación a que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, tendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas.

Expuesto lo anterior, como premisa, es pertinente señalar que el ser humano, desde su nacimiento y hasta su muerte, tiene derecho a una vida digna, prerrogativa sobre la que descansan el resto de los derechos humanos que tiene garantizados, como aquel relacionado con un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla el derecho a los seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a la voluntad de la persona. El derecho a vivir con calidad no es un ideal, sino una obligación que el Estado debe garantizar, adoptando las medidas apropiadas para asegurar su efectividad, a su vez, el derecho a una pensión digna para las personas que durante su vida laboral se han hecho merecedoras al mismo y generar los mecanismos necesarios para que eso suceda, resulta indispensable para que el Estado pueda garantizar las necesidades básicas del jubilado o pensionado y de sus dependientes económicos.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", contempla el derecho de toda persona a disfrutar de una seguridad social que le proteja de la vejez, a fin de llevar una vida digna y decorosa, lo cual se aprecia en su artículo 9, veamos su contenido:

Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-11-

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

El artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone:

Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

La parte actora asegura que dicha prerrogativa le está siendo vulnerada con la emisión del acto que reclama, en tanto la demandada realiza un descuento indebido sobre el monto retroactivo de la Pensión que le fue otorgada.

Así, de la lectura que se realiza al acto combatido se aprecia que:





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-13-

Ahora bien, dado que el oficio combatido es ilegal, en atención a los principios de exhaustividad y mayor beneficio, esta Sala Ordinaria Especializada procede a analizar la procedencia de la pretensión del actor, respecto a que ha operado la prescripción para hacer efectivo el cobro del préstamo a corto plazo, que, a dicho de la autoridad, el actor adeuda a la Caja.

El artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, dispone que:

"Artículo 61.- Los créditos respecto de los cuales la caja tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a contar de la fecha en que la propia caja pueda, conforme a la Ley, ejercitar su derecho.

Por otro lado, el artículo 41 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, establece que:

Artículo 41.- Los préstamos se concederán a un plazo máximo de 18 meses y se pagarán en abonos quincenales.

De la lectura de los numerales referidos se tiene que, si el otorgamiento del préstamo fue el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, a un plazo de **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** como préstamo a corto plazo, así lo refiere la demandada en su oficio de contestación de demanda, foja treinta y tres reverso, entonces, el préstamo debió ser liquidado en la primer quincena de mayo de dos mil once.

En ese orden argumentativo, se concluye que, el término de diez años que hace referencia el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, feneció en la primera quincena de dos mil veintiuno, siendo así que, al momento en que fue realizado el descuento de referencia, a saber catorce de marzo de dos mil veintitrés, había operado la prescripción.

En tales condiciones, la determinación de la autoridad demandada transgrede el derecho a la seguridad jurídica previsto en el numerales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no fundar motivar su acto de autoridad, siendo éste un es un derecho humano, dentro del que se encuentra inmerso el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana reconocido por nuestra Constitución, el cual todas las autoridades están obligadas a respetar (de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se cita con posterioridad para pronta referencia); lo que en el caso concreto no aconteció y por ende, es procedente declarar la nulidad del oficio impugnado.

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio

TJ/I-45616/2023
2023/05/18



no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

(...)

Máxime, que no debe perderse de vista que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal (...).”

Así tenemos, que si el precepto legal recientemente reproducido, establece que los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, luego entonces el acto combatido no cumple con dichos requisitos, transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y tomando en cuenta que el actor acudió a este Órgano Jurisdiccional a fin de que se le imparta justicia con motivo del acto combatido, este Órgano Jurisdiccional considera que la determinación de la autoridad demandada no está ajustada a derecho, al adolecer de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 16 constitucional, que todo acto de autoridad debe contener; lo que se traduce en una indebida motivación, siendo este un derecho humano que posee y que se encuentra reconocido en nuestra Norma fundamental, pues el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse y por ende, no se pueden dejar de observarse por esta Sala del Conocimiento.

Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio cuyo rubro y sumario expresan lo siguiente:

Tesis, 1a. XVIII/2012 (Sa.)	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta	Décima Época	160073 3 de 134
PRIMERA SALA	Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1	Pág. 257	Tesis Aislada (Constitucional)

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1; Pág. 257 **DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES**



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-15-

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.

Atento a que las manifestaciones realizadas por la parte actora resultan fundadas y suficientes para declarar la nulidad del acto impugnado y satisfacer la pretensión deducida, se hace innecesario el estudio de los restantes argumentos planteados por la parte actora, toda vez que cualquiera que fuese el contenido de ellos, en nada variaría el sentido de este fallo, resultando aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, Tercera Época, que dispone:

"CAUSALES DE NULIDAD. SI RESULTA FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD NO ES NECESARIO EL ANÁLISIS DE TODOS LOS DEMÁS. - En los casos en que el actor haga valer varias causales de nulidad en la demanda y al estudiarlas, la Sala del conocimiento considere que una es fundada y suficiente para declarar la nulidad de la resolución o acto impugnado, y para satisfacer la pretensión del demandante, no está obligada a analizar en el juicio las demás causales."

Asimismo, con base en la conclusión alcanzada, sirve de apoyo la Tesis Jurisprudencial de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-108, Cuarta Parte, Página 72 cuyo rubro y texto se indica:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. - Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo, resulta fundado uno de éstos, y el mismo es suficiente para

TJ-I-45616/2023

PA-030414-2024

otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.”

Atento a las consideraciones jurídicas antes expuestas, esta Sala Ordinaria Especializada considera que es procedente declarar la nulidad del acto impugnado en este juicio, con todas sus consecuencias legales, ya que en el caso concreto se actualiza el supuesto previsto en la fracción II del artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que, con fundamento en lo que establece el artículo 102 fracción III de la Ley referida, queda obligada la autoridad demandada, a restituir al actor en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados, que en el caso consiste, en: **a)** dejar sin efectos el acto combatido; **b)** deberá emitir un nuevo acto, debidamente fundado y motivado, en donde se abstenga de hacer efectivo el cobro de cualquier cantidad derivada del préstamo a corto plazo que le fuera concedido al actor cuando era trabajador en activo; **c)** realizar el pago de los montos que ya le fueron descontados al actor con motivo del acto declarado nulo.- Lo que deberá hacer dentro del plazo de **QUINCE DÍAS HÁBILES** contados a partir de la fecha en que quede firme el presente fallo, para que lo cumplimente en los términos en que se resolvió.”

VII. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.

A. Expuestos los fundamentos y motivos en los que se apoyó la sentencia apelada, este Pleno Jurisdiccional procede al análisis de la **primera parte del primer agravio** planteado por la autorizada de la autoridad demandada en el presente asunto, en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, en donde medularmente refiere que *en primer lugar, es importante precisar que el fondo de la litis, al tratarse del descuento derivado de un préstamo a corto plazo, se trata de materia mercantil y no administrativa, por lo que esta Sala no es competente para resolver sobre dicho cobro motivo por el cual debe declararse el sobreseimiento del presente juicio.*

En ese mismo tenor, refiere que *no se debe perder de vista que el adeudo que tiene la actora con la autoridad no es materia de la presente litis, toda vez que la vía administrativa no es la correcta para que demande el crédito a corto plazo que le fue otorgado por la autoridad, razón por la que únicamente deberá resolver sobre si el pago de pensión se encuentra debidamente fundado y motivado y en su caso, únicamente podrá condenar a esta entidad a emitir una respuesta debidamente fundada y motivada y no podrá pronunciarse respecto al adeudo que la actora tenía con la autoridad demandada, pues en caso de hacerlo, estaría extralimitado sus atribuciones, haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere transgrediendo con*



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024

JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-17-

ello el principio de competencia por materia, razón por la que se debe declarar incompetente para conocer respecto del adeudo que tiene la actora con la autoridad demandada.

A consideración de este Pleno Jurisdiccional la primera parte del primer agravio hecho valer por la autoridad demandada, en el recurso de apelación RAJ.4307/2024 resulta **infundado** para revocar el fallo apelado, por las consideraciones de derecho que a continuación se explican:

En primer lugar, tenemos que observar lo que dispone el artículo 3 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual se cita a continuación:

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las alcaldías dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;
(...)

Del precepto legal citado se desprende que este Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales.

En ese sentido, la primera parte del primer agravio expuesto por la autoridad demandada resulta infundado, puesto que la apelante pierde de vista que el acto impugnado lo constituye el pago de pensión, de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se le realizó un descuento por concepto de un préstamo a corto plazo que le otorgó la misma Entidad, el cual fue emitido por la Gerencia de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, el cual, al ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, debe atenerse a sus propias leyes, resulta evidente que

este Tribunal sí es competente para conocer de la controversia planteada, tal como lo dilucidó la Sala de conocimiento en el Considerando I de la sentencia recurrida.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del entonces Distrito Federal, las controversias que surjan por resoluciones de la Caja, derivadas de las prestaciones a que se refiere la citada Ley, serán competencia del entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dicho numeral se cita para mejor comprensión a continuación:

ARTICULO 13.- Las controversias que surjan por resoluciones de la Caja, derivadas de las prestaciones a que se refiere esta Ley, serán de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

En las relatadas condiciones, la **primera parte del primer agravio** hecho valer por la autoridad demandada en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, resulta **infundado**.

B. Ahora bien, este Pleno Jurisdiccional procede al análisis de la **segunda parte del primer agravio** hecho valer por la autoridad demandada en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, en donde medularmente manifiesta que *conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 5, 29, 33, 35, 40, 169, 170, 174 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como de los artículos 1, 2, 75, 78, 84, 85, 86, 1049, 1050, 1063, 1090, 1092, 1104 del Código de Comercio, este Organismo Público Descentralizado cuenta con el periodo de diez años para ejercitar la acción causal y así realizar el cobro del pagaré por medio del cual se otorgó préstamo a corto plazo a la actora.*

Al respecto, a consideración es esta Sala de Alzada dicha manifestación resulta **en una parte de desestimarse y en otra infundada**, por las consideraciones de derecho que a continuación se explican:



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-19-

En primer lugar, la parte de **desestimarse** es aquella donde refiere que la autoridad demandada contaba con el periodo de diez años para ejercitar la acción causal y así realizar el cobro del pagaré por medio del cual se otorgó préstamo a corto plazo a la actora, pues contrario a lo argumentado, la Sala Ordinaria no determinó que en este caso no operaba la prescripción señalada por la parte actora, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, sino que, por el contrario, determinó que dicha figura **SÍ** operaba en el presente caso, pues el otorgamiento del préstamo fue el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, por lo que el plazo de las DATA PERSONAL ART.186 LTAIPRO para su liquidación concluyó hasta el quince de mayo de dos mil once, de ahí que, el término de diez años señalado en el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal para que operara la prescripción, feneció en la primera quincena de mayo de dos mil veintiuno, siendo que el descuento a la actora se realizó hasta el catorce de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que ya se había actualizado la prescripción para requerir los créditos que tuviera derecho la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México en la que tenga carácter de acreedor.

Derivado de lo anterior, se concluye que la autoridad apelante combate consideraciones que no forman parte de los motivos y fundamentos de la sentencia apelada, pues trata de desvirtuar una sentencia diversa en la que la Sala Ordinaria hubiese determinado que no operaba la prescripción establecida en el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, **cuando en realidad la Sala determinó que dicha figura jurídica sí operaba en el presente caso.**

Sustenta lo anterior la jurisprudencia número S.S./J. 1 emitida por este Tribunal en la Tercera Época y, aprobada en sesión plenaria del día ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro y texto dispone lo siguiente:

TJ/I-45616/2023
MAL/2023/11



PA-CO4614-2024

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, DESESTIMACIÓN DE LOS.- Si en el recurso de apelación se hacen valer como agravios cuestiones que no fueron planteadas o argumentadas en los escritos de demanda y/o contestación, son de desestimarse por no haber formado parte de la litis.

Igualmente, son de desestimarse los agravios que no combaten los fundamentos legales y/o los motivos en los que la Sala ordinaria apoyó la sentencia recurrida.

(Énfasis añadido)

Del mismo modo sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número S.S./J. 10 sustentada por este Tribunal en la Segunda Época, aprobada en sesión plenaria del día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, cuyo rubro y texto dispone lo siguiente:

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN, DESESTIMACIÓN DE LOS.- Si la parte recurrente hace valer como agravios ante la Sala Superior cuestiones que no fueron alegadas como motivo de anulación o que no se expusieron en el escrito de contestación de la demanda, deben desestimarse por no haber formado parte de la litis; igualmente, aquellos que no combaten los fundamentos y motivos legales en los que la Sala Ordinaria sustentó la sentencia recurrida.

(Énfasis añadido)

Ahora bien, respecto al tema de la actualización de la prescripción, cabe precisar que este Pleno Jurisdiccional comparte la determinación allegada por la Sala Ordinaria, en el sentido de que dicha figura jurídica si se actualiza en el caso que nos ocupa, en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, es imperante referirnos al contenido del artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, el cual se cita a continuación:

ARTICULO 61.- Los créditos respecto de los cuales la caja tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a contar de la fecha en que la propia caja pueda, conforme a la Ley, ejercitar su derecho.

Del precepto legal anterior se desprende que los créditos respecto de los que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México tenga

Ahora bien, en su oficio de contestación a la demanda, la autoridad enjuiciada refirió que el otorgamiento del préstamo adeudado por la actora se realizó el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el cual, fue convenido como un préstamo que se debía liquidar en treinta y seis quincenas (dieciocho meses), es decir, hasta la primera quincena de mayo de dos mil once.

En ese orden de ideas, el plazo de diez años que hace referencia el artículo 61 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, empezó a correr desde la primera quincena de mayo de dos mil once, y feneció en la primera quincena de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, si la autoridad demandada realizó el descuento sobre el monto retroactivo de la pensión de la que es beneficiaria la actora por el adeudo del préstamo referido el catorce de marzo de dos mil veintitrés, resulta evidente que para esa fecha había prescrito la facultad de la Caja para requerir a la actora el crédito generado por la falta de pago del préstamo otorgado a la demandante el dieciocho de noviembre de dos mil nueve, de conformidad al numeral precitado.

En tales condiciones, tal como lo determinó la Sala de Origen, con el acto impugnado la autoridad demandada transgrede el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 Constitucional, al no fundar ni motivar su acto de autoridad, siendo este un derecho humano que posee y que se encuentra reconocido en nuestra norma fundamental, pues el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse y por ende, no se pueden dejar de observar por este Pleno Jurisdiccional.

Es aplicable al caso, la Jurisprudencia número uno de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el veintinueve de junio de 1987, página 24, que a la letra dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- Para que tenga validez una resolución o determinación de las autoridades del Departamento del



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-23-

Distrito Federal, se debe citar con precisión el precepto legal aplicable, así como también las circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión de este acto además de que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea en un caso específico se configuren las hipótesis normativas requisitos sin los cuales, no pueden considerarse como debidamente fundado y motivado el acto de autoridad."

Por tanto, este Pleno Jurisdiccional considera que la **segunda parte del primer agravio** hecho valer en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024** por la autoridad demandada en el presente juicio, es en una parte de **desestimarse y en otra infundada**, tal como se analizó en lo párrafos anteriores.

C. Ahora bien, se procede al análisis de la tercera parte del primera agravio hecho valer en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024** por la autoridad demandada en el presente juicio, la cual a consideración de este Pleno Jurisdiccional resulta **inoperante**, ya que se reproducen casi textualmente los mismos argumentos ya expresados en su contestación de demanda y por ende ya fueron examinados por la Sala Ordinaria en primera instancia.

Sirve de sustento para dicha resolución la Jurisprudencia S.S/J.55, de la Tercera Época, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, y que a la letra indica lo siguiente:

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SE HACEN VALER LOS MISMOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN LA DEMANDA O EN LA CONTESTACIÓN. - Si en el recurso de apelación, se reproducen casi textualmente los mismos argumentos expresados en los escritos de demanda y de contestación, los cuales ya fueron examinados por la Sala de origen, sin controvertir las consideraciones por las que se declararon infundados en la sentencia que se apela; tales argumentos resultan inoperantes para impugnarla legalidad de dicho fallo

Bajo este tenor los agravios que se hacen valer por la autoridad demandada, son los mismos que los argumentos expresados en su contestación de demanda, para muestra de ello se transcriben los agravios y los argumentos planteados por la parte demandada en el recurso de apelación, en la siguiente tabla comparativa:

Contestación de demanda	Agravios en apelación
<p>Es decir, como era del conocimiento de DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX que en caso de tener algún crédito pendiente de liquidar y a efecto de que no se viera afectado o retrasado su trámite de pensión, el accionante debía liquidarlo y en caso de que no realizara el pago del mismo le sería descontado de la cantidad que le correspondería como pago retroactivo de la pensión que le fuera otorgada, tal y como lo establece el artículo 21 segundo párrafo de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal:</p> <p>(...)</p>	<p>Es decir, como era del conocimiento de DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX, que en caso de tener algún crédito pendiente de liquidar y a efecto de que no se viera afectado o retrasado su trámite de pensión, el accionante debía liquidarlo y en caso de que no realizara el pago del mismo, le sería descontado de la cantidad que correspondería como pago retroactivo de la pensión que le fuera otorgada, tal y como lo establece el artículo 21 segundo párrafo de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal:</p> <p>(...)</p>
<p>En razón al precepto ante descrito, como bien lo establece, para poder disfrutar de una pensión el hoy actor debía cubrir previamente el pago total de sus adeudos pendientes, y en determinado caso que el mismo no pudiera efectuar el pago, dicha cantidad le sería descontada de la cantidad que le correspondiera como pago retroactivo de la pensión que le fuera otorgada, información que nunca le fue ocultada a DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX ni mucho menos como lo pretende hacer ver el actor, haciéndole creer a esta H. Juzgadora, que mi Representada actuó de manera arbitraria y unilateral, toda vez que DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX firmó e ingreso a esta Entidad, de forma clara expresa que es de su conocimiento que en caso de que gozara de algún crédito hipotecario o a corto plazo, debía acudir de forma inmediata a las áreas correspondiente a efecto de realizar las gestiones necesarias para realizar el pago correspondiente.</p>	<p>En razón al precepto ante descrito, como bien lo establece, para poder disfrutar de una pensión el hoy actor debía cubrir previamente el pago total de sus adeudos pendientes, y en determinado caso que el mismo no pudiera efectuar el pago, dicha cantidad le sería descontada de la cantidad que le correspondiera como pago retroactivo de la pensión que le fuera otorgada, información que nunca le fue ocultada a DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX ni mucho menos como lo pretende hacer ver el actor, haciéndole creer a esta H. Juzgadora, que mi Representada actuó de manera arbitraria y unilateral, toda vez que DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX firmó e ingreso a esta Entidad, de forma clara expresa que es de su conocimiento que en caso de que gozara de algún crédito hipotecario o a corto plazo, debía acudir de forma inmediata a las áreas correspondiente a efecto de realizar las gestiones necesarias para realizar el pago correspondiente.</p>
<p>Ahora bien, tal y como lo confiesa el accionante en su escrito inicial de demanda, a la fecha de su solicitud de pensión, tenía pendiente liquidar el préstamo a corto plazo que le fue otorgado a través de un pagaré, el cual</p>	<p>Ahora bien, tal y como lo confiesa el accionante en su escrito inicial de demanda, a la fecha de su solicitud de pensión, tenía pendiente liquidar el préstamo a corto plazo que le fue otorgado a través de un pagare, el cual</p>



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-25-

<p>debía ser liquidado en un plazo de 36 quincenas, situación que <small>DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX</small> o cumplió, toda vez que a la fecha del otorgamiento de la pensión el accionante no había liquidado el préstamo que le había sido conferido, razón por la cual y en escrito cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 segundo párrafo de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, esta Entidad, se encuentra debidamente facultada de realizar el cobro directo del adeudo del préstamo a corto de su primera paga de pensión, ya que de lo contrario, no se este Organismo se encontraría material y jurídicamente imposibilitado de otorgar la pensión que solicitó el accionante hasta en tanto no liquidara el adeudo que este presentaba con la Entidad, toda vez que eso conllevaría a violentar lo establecido en la Ley de la materia, puesto que dicho artículo es claro y preciso al señalar que para poder disfrutar de una pensión previamente el elemento o sus familiares deben cubrir a la caja los adeudos pendientes que tengan con este Organismo.</p>	<p>debía ser liquidado en un plazo de 36 quincenas, situación que <small>DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX</small> no cumplió, toda vez que a la fecha del otorgamiento de la pensión el accionante no había liquidado el préstamo que le había sido conferido, razón por la cual y en escrito cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 segundo párrafo de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, esta Entidad, se encuentra debidamente facultada de realizar el cobro directo del adeudo del préstamo a corto de su primera paga de pensión, ya que de lo contrario, no se este Organismo se encontraría material y jurídicamente imposibilitado de otorgar la pensión que solicitó el accionante hasta en tanto no liquidara el adeudo que este presentaba con la Entidad, toda vez que eso conllevaría a violentar lo establecido en la Ley de la materia, puesto que dicho artículo es claro y preciso al señalar que para poder disfrutar de una pensión previamente el elemento o sus familiares deben cubrir a la caja los adeudos pendientes que tengan con este Organismo.</p>
<p>Ahora bien, de conformidad a lo anterior y toda vez que <small>DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX</small> no liquidó su adeudo antes del otorgamiento de su pensión, esté Organismo se vio obligado a realizar las deducciones explícitas en la hoja de pago de pensión de fecha 14 de marzo de 2023, identificada con el número de folio 39686, toda vez que como es del conocimiento de esta Juzgadora, así como del propio promovente, mi Representada es Administradora de las aportaciones que realizan los elementos en activo, y de los cuales dependen totalmente las pensiones y prestaciones que otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, es decir que en determinado caso que esta Entidad no hiciera efectivos los créditos otorgados a los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México,</p>	<p>De conformidad a lo anterior y toda vez que <small>DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX</small> no liquidó su adeudo antes del otorgamiento de su pensión, esté Organismo se vio obligado a realizar las deducciones explícitas en la hoja de pago de pensión, toda vez que como es del conocimiento de esta Juzgadora, así como del propio promovente, mi Representada es Administradora de las aportaciones que realizan los elementos en activo, y de los cuales dependen totalmente las pensiones y prestaciones que otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, es decir que en determinado caso que esta Entidad no hiciera efectivos los créditos otorgados a los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México, incurriría en responsabilidad administrativa, toda vez que esto</p>

incurrirían en responsabilidad administrativa, toda vez que esto causaría un detrimento al patrimonio de la Entidad.	causaría un detrimento al patrimonio de la Entidad.
Es impórtate manifestar que esta Entidad “no cobró de manera injusta y arbitraria” cantidad alguna, siendo lo correcto señalar que en el pago de pensión que recibió el hoy actor, resultó procedente realizar el descuento previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, que conforme a la letra, establece lo siguiente: (...)	Por lo anterior, es que esta Entidad “no cobró de manera injusta y arbitraria” cantidad alguna, siendo lo correcto señalar que en el pago de pensión que recibió el hoy actor, resultó procedente realizar el descuento previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, que conforme a la letra, establece lo siguiente: (...)

Así las cosas, la **tercera parte del primer agravio** hecho valer en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024** por la autoridad demandada en el presente juicio, es **inoperante** para revocar o modificar la sentencia apelada, tal como se analizó en los párrafos anteriores.

D. Ahora bien, este Pleno Jurisdiccional procede al análisis de la **primera parte del segundo agravio** expuesto por la autoridad demandada, ahora apelante en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, en la que medularmente señala que *la Sala Ordinaria se abstuvo de analizar, estudiar y valorar todas y cada una de las probanzas ofrecidas en el apartado correspondiente del escrito de contestación a la demanda, aun cuando tiene la obligación de emitir resoluciones claras, precisas y congruentes respecto a las pretensiones de las partes, además de que los medios de prueba aportados y admitidos deben ser valorados en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia y el Tribunal debe exponer en su caso, los fundamentos de la valoración jurídica realizada, así como los de su determinación, hecho que no se materializa en la resolución recurrida.*

Continúa manifestando que *de la lectura de la sentencia apelada queda manifiesto que la Sala de Origen se abstuvo de cumplir con la obligación de estudiar, analizar y valorar debidamente las pruebas ofrecidas,*



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-27-

transgrediendo con ello normas básicas de procedimiento emitiendo una sentencia imprecisa e incongruente.

Al respecto, a consideración de esta Sala de Segunda Instancia el agravio en estudio resulta **inoperante** toda vez que la apelante no señala qué pruebas se omitieron en cuanto a valoración, cuáles se valoraron de manera indebida, con qué probanza acreditaba algo distinto a lo determinado por la Sala del conocimiento, y como es que esa o esas pruebas hubiesen cambiado el sentido del fallo de haberse analizado, de ahí que lo hecho valer en nada incide en el fallo que se estudia

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia S.S.J/.40, dictada por el entonces Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, correspondiente a la Tercera Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE ALEGA INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS RENDIDAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. Los agravios planteados en el recurso de apelación, consistentes en la indebida valoración de las pruebas rendidas en el juicio de nulidad, deben expresar qué pruebas se dejaron de valorar, el alcance probatorio de tales probanzas, así como la forma en que éstas trascenderían al fallo en beneficio del agraviado, pues solamente en este caso puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicios al mismo y, consecuentemente, determinar si la sentencia recurrida es ilegal o no; en tal virtud, los agravios expresados que no reúnan los señalados requisitos, deben estimarse inoperantes por insuficientes.

E. Finalmente, esta Sala de Alzada procede al análisis de la **segunda parte del segundo agravio** planeado por la autoridad demandada en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, en el que medularmente hace valer que *es importante resaltar que de ninguna forma el acto reclamado contraviene los derechos humanos que por mandato constitucional le asisten a la actora, en términos del artículo 1, toda vez que la aplicación del principio pro persona y de los tratados internacionales de los que México es parte en los que se reconocen los aludidos derechos, no deriva necesariamente a que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno*

ese principio puede ser constitutivo de derecho alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorable que sean aducidas puesto que dicho estudio será conforme a las normatividades aplicables.

Al respecto, a consideración de este Pleno Jurisdiccional, el argumento en estudio resulta infundado, pues contrario a lo que señala la autoridad apelante, el acto impugnado si transgrede los derechos constitucionales de la actora, pues tal como lo determinó la Sala de primera instancia, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla el derecho a los seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a la voluntad de la persona; el derecho a vivir con calidad no es un ideal, sino una obligación que el Estado debe garantizar, adoptando las medidas apropiadas para asegurar su efectividad, a su vez, el derecho a una pensión digna para las personas que durante su vida laboral se han hecho merecedoras al mismo y generar los mecanismos necesarios para que eso suceda, resulta indispensable para que el Estado pueda garantizar las necesidades básicas del jubilado o pensionado y de sus dependientes económicos.

Asimismo, tal como lo refirió la Sala de Origen, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", contempla el derecho de toda persona a disfrutar de una seguridad social que le proteja de la vejez, a fin de llevar una vida digna y decorosa, de conformidad a lo que establece en su artículo 9.

Así, a consideración de este Pleno Jurisdiccional, dicha prerrogativa le está siendo vulnerada a la actora con la emisión del acto que reclama, en tanto la demandada realiza un descuento indebido sobre el monto retroactivo de la Pensión que le fue otorgada, pues del análisis efectuado al acto impugnado se advierte que la autoridad demandada fue omisa en señalar cuales fueron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-29-

Por lo que, como correctamente lo dilucidó la Sala juzgadora, lo procedente era declarar la nulidad del pago de pensión, de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, pues del contenido del mismo se desprende que la autoridad demandada fue omisa en indicar las razones particulares del porque se le realizó un descuento a su pago de pensión, exteriorizando solamente que el saldo líquido a su favor era de

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX, sin dar más motivos ni fundamentos legales; en ese sentido, si el acto de autoridad carece de la debida fundamentación y motivación, es inconcuso que el mismo es ilegal, pues transgrede en perjuicio del demandante la garantía constitucional de fundamentación y motivación debida del derecho humano de seguridad jurídica, reconocidas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve a lo anterior, la Tesis Aislada IV.2o.A.50 K (10a.), proveniente de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo III, página 2241, de rubro y contenido siguientes:

"SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbibido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de

TJI-45616/2023
AL. AMERICA

PA-004614-2024

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado."

Consecuentemente, la **segunda parte del segundo agravio** planteado por la autoridad demandada en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, resulta **infundado** para revocar o modificar la sentencia apelada, por los razonamientos vertidos en los párrafos anteriores.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024
JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023

-31-

En mérito de lo anterior, este Pleno Jurisdiccional determina que los agravios expuestos por la autoridad apelante en el recurso de apelación **RAJ.4307/2024**, resultaron la **primera parte del primer agravio infundada**, la **segunda parte del primer agravio resulta en una parte de desestimarse y en otra infundada**, finalmente resultan inoperantes la **tercera parte del primer agravio**, la **primera parte del segundo agravio y la segunda parte del segundo agravio**, para revocar o modificar la sentencia de primera instancia, por lo que, resulta procedente **confirmar** por sus propios motivos y fundamentos, la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, en el juicio de nulidad **TJ/I-45616/2023**.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1 y 15 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como 1, 98, 116 y 117 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Pleno Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el recurso de apelación **RAJ.4307/2024** interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en el presente asunto, conforme a lo precisado en el Considerando I de esta resolución.

SEGUNDO. Los agravios expuestos por la autoridad apelante en el recurso de apelación **RAJ.4370/2024**, resultaron la **primera parte del primer agravio infundada**, la **segunda parte del primer agravio resulta en una parte de desestimarse y en otra infundada**, finalmente resultan inoperantes la **tercera parte del primer agravio**, la **primera parte del segundo agravio y la segunda parte del segundo agravio**, para revocar o modificar la sentencia de primera instancia, de conformidad con los motivos y fundamentos legales que se precisan en el Considerando **VII** de esta resolución.

TJ-I-45616/2023
Nulidad



PA-034614-2024

TERCERO. Se **CONFIRMA** la sentencia emitida por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad número **TJ/I-45616/2023**.

CUARTO. Para garantizar el acceso a la impartición de justicia, se les hace saber a las partes que, en contra de la presente resolución, podrán interponer los medios de defensa procedentes en términos del artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y sus respectivas de la Ley de Amparo, asimismo, se les comunica que, en caso de alguna duda en lo referente al contenido del presente fallo, podrán acudir ante la Magistrada Ponente.

QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y con testimonio de la presente resolución, devuélvase a la Sala de Origen el expediente del juicio de nulidad citado y en su oportunidad, archívese el recurso de apelación número **RAJ.4307/2024**.

SIN TEXTO



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México



PA - 004614 - 2024

#86 - RAJ.4307/2024 - APROBADO		
Convocatoria: C-20/2024 ORDINARIA	Fecha de pleno: 29 de mayo del 2024	Ponencia: SS Ponencia 7
No. juicio: TJ/I-45616/2023	Magistrado: Doctora Mariana Moranchel Pocaterra	Páginas: 33

ASÍ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LO RESOLVIÓ EL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO INTEGRADO POR LOS C.C. MAGISTRADOS DOCTORA ESTELA FUENTES JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ESTE TRIBUNAL, LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARMIDA REYES, LICENCIADA LAURA EMILIA ACEVES GUTIÉRREZ, DOCTOR JESÚS ANLÉN ALEMÁN, MAESTRO JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MAESTRA REBECA GÓMEZ MARTÍNEZ, DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA, DOCTORA XÓCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES Y EL LICENCIADO ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ.

FUE PONENTE EN ESTE RECURSO DE APELACIÓN LA C. MAGISTRADA DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 9, 15 FRACCIÓN VII, 16 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 116 Y 117 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR ACUERDO TOMADO POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO JURISDICCIONAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, FIRMAN LA PRESENTE RESOLUCIÓN LA MAGISTRADA DOCTORA ESTELA FUENTES JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE LA SALA SUPERIOR Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, ANTE EL C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I", QUIEN DA FE.

PRESIDENTA

MAG. ESTELA FUENTES JIMÉNEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I"

MTRO. JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO

EL MAESTRO JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I" DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE PÁGINA ES PARTE INTEGRANTE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.4307/2024 DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD: TJ/I-45616/2023, PRONUNCIADA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DE ESTE TRIBUNAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN: "PRIMERO. Este Pleno Jurisdiccional es competente para conocer y resolver el recurso de apelación RAJ.4307/2024 interpuesto por la autorizada de la autoridad demandada en el presente asunto, conforme a lo precisado en el Considerando I de esta resolución. SEGUNDO. Los agravios expuestos por la autoridad apelante en el recurso de apelación RAJ.4307/2024, resultaron la primera parte del primer agravio infundada, la segunda parte del primer agravio resulta en una parte de desestimarse y en otra infundada, finalmente resultan inoperantes la tercera parte del primer agravio, la primera parte del segundo agravio y la segunda parte del segundo agravio, para revocar o modificar la sentencia de primera instancia, de conformidad con los motivos y fundamentos legales que se precisan en el Considerando VII de esta resolución. TERCERO. Se CONFIRMA la sentencia emitida por la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración de este Tribunal, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad número TJ/I-45616/2023. CUARTO. Para garantizar el acceso a la impartición de justicia, se les hace saber a las partes que, en contra de la presente resolución, podrán interponer los medios de defensa procedentes en términos del artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y sus respectivas de la Ley de Amparo, asimismo, se les comunica que, en caso de alguna duda en lo referente al contenido del presente fallo, podrán acudir ante la Magistrada Ponente. QUINTO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE y con testimonio de la presente resolución, devuélvase a la Sala de Origen el expediente del juicio de nulidad citado y en su oportunidad, archívese el recurso de apelación número RAJ.4307/2024."

IN TEXT C